

Las singularidades y los desafíos del movimiento por la solidaridad internacional

Borja Vivanco

Movimientos sociales de solidaridad. Características generales y evolución

Los movimientos sociales de solidaridad toman protagonismo en España a finales de los ochenta. Estas organizaciones denuncian las desigualdades socioeconómicas y crean prestaciones para solventarlas. De estos movimientos, vamos a distinguir los que se dedican a luchar contra la pobreza y atienden a inmigrantes en los países desarrollados, y los que actúan en el Tercer Mundo. Generalmente, se suelen denominar ONG (Organizaciones No Gubernamentales), concepto que en sí mismo dice más de lo que no son que de lo que realmente significan^[1]. También, con el término ONGD se desean identificar las organizaciones a favor del desarrollo del Tercer Mundo.

Lo que define a los movimientos sociales es su deseo de llevar a cabo cambios sociales u oponerse a ellos. Su movilización y estrategias tienen como objetivo concienciar a la sociedad civil e influir en los gobiernos. Pero los movimientos sociales de solidaridad además, quieren crear bienes y servicios destinados a los colectivos de cuyos derechos se erigen como defensores. De modo que la espontaneidad, el dinamismo y el activismo que caracterizan a los movimientos sociales tienen que ir acompañados de una adecuada captación, dirección y organización de recursos destinados a los beneficiarios.

Los movimientos sociales de solidaridad ni son grupos de autoayuda ni reivindican derechos y mejoras en el nivel de vida para las personas que los conforman. Esta es una diferencia a destacar frente a, por ejemplo, los movimientos obreros tradicionalmente caracterizados porque sus miembros reivindican mejoras de carácter socioeconómico para ellos mismos. Sin embargo, no queremos decir que a los beneficiarios se les impida formar parte de los movimientos sociales de solidaridad, pero no es habitual que lo hagan.

Los movimientos sociales configuran nuevas formas de participación política que quieren ser más flexibles y cercanas a la sociedad. Los movimientos sociales y en general el asociacionismo, son síntomas de una sociedad más democrática. Esta idea no surge en la actualidad. A mediados del siglo XIX, A. Tocqueville refiriéndose a la todavía joven democracia de los Estados Unidos, se expresa en estos términos (A. Tocqueville: 196,9):

«En los pueblos democráticos (...) todos los ciudadanos son independientes y débiles (...). Todos caen, pues, en la impotencia, si no aprenden a ayudarse libremente (...). En los países democráticos, la ciencia de la asociación es la ciencia madre (...). Entre las leyes que rigen las sociedades humanas, hay una que parece más precisa y más clara entre todas las demás. Para que los hombres sigan siendo civilizados, o lleguen a serlo, es preciso que se desarrolle entre ellos el arte de asociarse, y que se perfeccione, en la misma relación en que crece la igualdad de condiciones».

Éstas organizaciones se suelen caracterizar por actuar como grupos de presión ante los poderes públicos, reclamando cuestiones que cuentan con el beneplácito de la sociedad pero no de los gobiernos democráticos que les representan. Pero los movimientos sociales, y más aún los de solidaridad, necesitan de las instituciones públicas, mayormente, para financiarse tal y como vemos en la Tabla 1. Algunos movimientos sociales como Greenpeace, para dejar clara su autonomía, se niegan a recibir dinero de la Administración Pública. Hoy en día, la mayoría de los movimientos sociales buscan la autofinanciación. Pero los recursos que son necesarios para desarrollar, por ejemplo, proyectos de cooperación, ayuda en emergencia... provocan que la ayuda pública sea imprescindible. Con lo que los movimientos sociales de solidaridad, a la vez que actúan de oposición a las políticas públicas, guardan una relación de dependencia y seguidismo respecto a ellas. En el Tercer Mundo, al mismo tiempo, las ONGD pueden ser vistas por los gobiernos como organizaciones extranjeras y ser acusadas de intrusismo.

Tabla 1

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS DE LAS ONGD EN 1995

	Subvenciones públicas	Donativos privados	Socios
Ayuda en Acción	92,72%	7,27%	50.000
Médicos sin Fronteras	56,24%	43,75%	60.000
Médicos Mundi	84,18%	15,81%	10.000
Intermón	47,18%	52,81 %	110.000
Manos Unidas	10,02%	89,97%	65.000

Fuente: A. Vernis y otros, 1998: 114

Los movimientos sociales de solidaridad heredan la tradición social de atención y servicio a los más desfavorecidos. Lo que ocurre es que las clásicas instituciones asistenciales intentan paliar las desigualdades del sistema económico pero sin cuestionarlo. Con lo que, tal vez sin pretenderlo, ayudan a su desarrollo. Sin embargo, los movimientos sociales critican las raíces de los problemas sociales y económicos, y suelen proponer alternativas globales. Podemos afirmar que la Iglesia es la organización que históricamente monopoliza la atención a los más necesitados en España. También su influencia se extiende a lo largo del mundo occidental y de los países colonizados. Pero las condiciones políticas de España y el retraso del proceso de secularización provocan que hasta la década de los ochenta, prácticamente la totalidad de estas organizaciones sean de carácter eclesial, primero casi exclusivamente formadas por clérigos y luego posteriormente por seculares.

Después del Concilio Vaticano II (1962-65) se realiza el compromiso social de la Iglesia y de sus misiones en el Tercer Mundo, que superan el ámbito religioso y promueven también el desarrollo económico y social de los pueblos. La organización más importante en España de atención a los pobres es Caritas, que también cuenta con proyectos de atención al Tercer Mundo. Aún hoy, un gran número de ONGD surgen de órdenes religiosas o están estrechamente vinculadas a ellas. Aunque hayan abandonado la confesionalidad, todavía esta característica permanece en su cultura organizacional.

Pensamos que es a partir de la segunda mitad de los años ochenta cuando se produce un incremento significativo del número de movimientos sociales de solidaridad y de voluntarios. Además del ámbito religioso, los centros educativos, los partidos políticos y los sindicatos promueven estas organizaciones. Así que creemos que puede existir una subordinación de los movimientos sociales de solidaridad respecto a las instituciones de las que surgen y por las que además suelen ser financiadas, del mismo modo que ocurre con los poderes públicos. En definitiva, las instituciones y agentes particulares que proveen de recursos, no sólo económicos sino también materiales o humanos, pueden requerir a cambio, influir en la determinación de los valores, estrategias y objetivos de estas organizaciones.

Rasgos principales de los problemas socioeconómicos que intentan resolver los movimientos sociales de solidaridad: Las nuevas pobrezas, las desigualdades Norte-Sur y la falta de integración de los inmigrantes

El primer motivo por el cual se originan los movimientos sociales de solidaridad radica en los problemas que intentan remediar. Vamos a exponer las características principales de los mismos. Comenzamos con la pobreza de los países desarrollados. Los países con un alto crecimiento económico y que logran un alto nivel de vida para la mayoría de la población, dejan a un lado los colectivos marginales, a quienes los poderes públicos, los partidos políticos, los sindicatos u otras instituciones sociales no prestan la atención necesaria.

Sus consecuencias sociales provocan una fractura social que se suele denominar dualización. No es que la sociedad esté dividida en dos partes, sólo que tiende a la polarización. Las tendencias socioeconómicas provocan el aumento de la exclusión y el surgimiento de un Cuarto Mundo dentro de las sociedades económicamente más avanzadas y el rostro de la pobreza posee características novedosas. Las exigencias de cualificación del tejido productivo y las tendencias del mercado de trabajo están en la raíz de este proceso. En buena medida, la diferenciación social se basa en una serie de propiedades adscriptivas o estigmas sociales, tal que la edad, el sexo, el país de origen, la formación... Las tendencias conllevan a que se puede distinguir un primer grupo de privilegiados, que son personas con empleo estable, bien remuneradas, con alta formación y que controlan todo el proceso productivo. Son trabajadores con posibilidades de ascenso, varones, de edad intermedia y físicamente intactos. Mientras que el segundo grupo, está compuesto mayoritariamente por jóvenes o personas de más edad, mujeres, minusválidos y extranjeros de países pobres. Están en paro o en situación laboral precaria. En este segmento inferior, cabe distinguir dos colectivos. Primero, el de los considerados tradicionalmente marginados (minusválidos, reclusos, prostitutas...). Segundo, el de aquellos cuya causa de marginación no es no contar con un empleo, sino su presencia en él en condiciones precarias.

El nivel de distribución de la renta suele ser considerado el indicador más adecuado para conocer el grado de igualdad económica en la sociedad. Para ello se puede utilizar el índice de Gini, que comprende el intervalo de 0 a 1, y que señala cuando los valores se acercan a 0, que el nivel de distribución es menor. La media de todos los países de la Tabla 2 es 0.3. Como vemos, Austria, Bélgica y los países escandinavos son los que gozan de una mayor distribución de la renta. A continuación les siguen Alemania,

Países Bajos, sur de Europa y Canadá. En los últimos lugares se encuentran el Reino Unido, Australia, Irlanda, Suiza y Estados Unidos.

De este modo, las organizaciones que atienden a los pobres como Caritas, pasan del campo meramente asistencial al de la investigación, la promoción y la acción social, enfrentándose con los nuevos rostros de la pobreza.

Por otro lado a nivel mundial, se produce, si no un aumento, sí un estancamiento de los niveles de pobreza en el Tercer Mundo. A la vez, el crecimiento desigual entre los países ricos y pobres, se acelera. Con el fin de evitar estos problemas, las ONGD suelen realizar proyectos de cooperación en el Tercer Mundo, ayuda de emergencia a las poblaciones necesitadas con el fin de paliar las consecuencias negativas de catástrofes naturales, guerras... y asistencia a refugiados.

Tabla 2

INDICE DE GINI EN LOS PAÍSES DE LA OCDE

País	Año	índice de GINI	País	Año	índice de GINI
Alemania	1989	0.28	Francia	1989	0.32
Australia	1989	0.33	Irlanda	1987	0.35
Austria	1987	0.23	Italia	1991	0.31
Bélgica	1992	0.25	Noruega	1991	0.25
Canadá	1994	0.31	Países Bajos	1991	0.31
España	1990	0.32	Reino Unido	1986	0.32
Estados Unidos	1994	0.40	Suecia	1992	0.25
Finlandia	1991	0.25	Suiza	1982	0.36

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 1998/99.

Para entender la problemática del Tercer Mundo, conviene tener en cuenta las condiciones políticas en las que viven estos países, que si no cuentan con gobiernos dictatoriales, poseen democracias frágiles bajo la influencia de los que tienen más riqueza. Desde un punto de vista económico, el PNB anual per capita de las naciones ricas es 56 veces mayor que el de los países más pobres en 1990. Son países en gran parte endeudados, donde la intervención del Estado en la economía es muy amplia y en la que el porcentaje del gasto público respecto al PIB es muy alto. Los recursos naturales y bienes agrícolas ocupan una gran parte de las exportaciones y las relaciones económicas y de intercambio comercial con los países desarrollados son desiguales. Así, la pobreza está muy generalizada y suelen ser grandes las diferencias en cuanto a la distribución de la renta dentro de las propias naciones. Las condiciones sanitarias, de higiene... son en gran medida precarias. Mientras que el nivel formativo, la igualdad entre hombres y mujeres y la esperanza de vida en muchos de los países subdesarrollados, se encuentran a una distancia significativa de los logros conseguidos por los países más desarrollados.

El tercer problema del cual queremos hablar es el de la emigración de los países del Sur a los del Norte. En realidad, no es un fenómeno novedoso. La historia de la humanidad en buena parte está concebida por los flujos migratorios, generalmente por causas económicas. En la actualidad, los países ricos se esfuerzan en poner freno a los inmigrantes del Tercer Mundo por medio de leyes restrictivas. Así se intenta evitar la desestabilización que supone para la cultura tradicional y sobre todo la carga económica que trae como consecuencia en la mayoría de los casos.

Hasta finales de la década de los ochenta, España es un país ajeno a los problemas sociales y económicos que trae consigo la inmigración de los países pobres. Creemos que es debido a la situación económica del país, sumergido en una alta tasa de paro y en una crisis económica que son poco atractivas para los inmigrantes. Esta situación no ocurre en otros países centroeuropeos a los cuales por cierto, hasta la crisis económica de 1973, acude una gran cantidad de españoles. Por otra parte, tengamos en cuenta que países como el Reino Unido y Francia siguen siendo potencias coloniales hasta los años sesenta, y continúan manteniendo con sus excolonias lazos económicos, comerciales, culturales y políticos más estrechos que, por ejemplo, los de España con Latinoamérica, Filipinas y Guinea Ecuatorial. La caída de los regímenes comunistas de Europa del Este y la crisis económica en la que desembocan estos países, provocan también el aumento de la emigración hacia los países occidentales. Por otro lado, no olvidemos la situación geográfica particular que tiene España, que sirve de lazo de comunicación de África y Latinoamérica con Europa.

De 1980 a 1992 se duplica el número de extranjeros en España. El número de africanos se multiplica por catorce y los asiáticos se multiplican por tres. Con lo que se suele hablar de una tercermundialización de la emigración. Pero hay que contar aquellos inmigrantes que no tienen la documentación exigida y cuya cifra se piensa que está en 1999 entre 70.000 y 100.000 personas. Sigue siendo un porcentaje escaso comparado con el de otros países europeos, y tal vez por ello no se reproducen los problemas sociales y xenó-fobos de estos países. A lo largo de los noventa creemos que es importante la labor de concienciación que no sólo desde los movimientos sociales sino también desde la Administración Pública se lleva a cabo para evitar actitudes racistas, y que según algunos estudios ha mejorado la disponibilidad social de la población hacia los inmigrantes.

Sin embargo, la prueba de fuego va a tener lugar cuando se produzca un choque cultural de envergadura y la sociedad perciba que los inmigrantes son los culpables de sus problemas económicos. Esto no se puede comprobar hasta que España no cuente con una tasa más alta de inmigración. En diciembre de 1999 se reformula la Ley de Extranjería, en la que se garantiza la educación, la sanidad y la libre circulación para todos los extranjeros, residan legalmente o no. Hasta ahora la Administración ha encontrado problemas jurídicos para atender a los inmigrantes, con lo que los movimientos sociales de solidaridad han tenido que ser los encargados de prestar algunos de los servicios que necesitan.

Estas organizaciones tienen como fin concienciar para que no se lleven a cabo actitudes xenófobas, denunciar las políticas de extranjería restrictivas, procurar que los inmigrantes mantengan su cultura, asistirles legalmente, prestarles servicios sanitarios, acogerles e integrarles. Para este último fin, las organizaciones suelen enseñarles el idioma, encontrarles vivienda, buscarles empleo, hacerles partícipes de la vida política y

social del país al que acuden... Pueden ser organizaciones especializadas en estos temas como SOS-Racismo o más genéricas y relacionadas con los servicios sociales y la cooperación al desarrollo. Hemos de tener en cuenta que los inmigrantes suelen crear sus propias organizaciones para los fines anteriormente expuestos. Pero al ser inmigrantes de países pobres y muchas veces sin-papeles, la infraestructura y los medios con los que cuentan son precarios y poco eficaces. En Cataluña, por ejemplo, se calcula que existen 84 organizaciones de carácter étnico, 23 organizaciones no étnicas pero especializadas en la asistencia a los inmigrantes y 6 generalistas.

Ventajas y desventajas del voluntariado

Vamos a comentar los aspectos más positivos y negativos que caracterizan a los voluntarios. La ventaja del voluntariado no reside simplemente en que es un recurso sin coste para los movimientos sociales. La gratificación que sienten las personas por contribuir en la misión de estas organizaciones supera al coste y esfuerzo personal de pertenecer a las mismas. Elemento que diferencia a los movimientos sociales de las empresas, donde la razón primera por la cual los trabajadores desean ser contratados, se suele deber a motivaciones económicas. Muchas veces se comprueba que los valores de solidaridad con los más necesitados pueden motivar más que un salario justo. Incluso, puede ser que los voluntarios perciban que cobrar un salario por el trabajo que realizan puede ser incongruente con lo que entienden que tiene que ser su servicio en estas organizaciones.

Los valores de los movimientos sociales son un valor añadido que facilita la integración y la motivación de los voluntarios, creemos que de una forma superior a los valores de las empresas. Igualmente, se suele pensar que los voluntarios son emprendedores, idealistas, tienen iniciativa... y cuentan con una serie de cualidades humanas que valoran cada vez más las empresas competitivas. Los propios donantes suelen preferir conferir recursos a una organización en la que la mayoría de los miembros son voluntarios, pues perciben claramente que no son movidos por ninguna inquietud económica.

El voluntariado cuenta con una formación multidisciplinar y con experiencias profesionales y personales muy amplias. A la vez, los voluntarios tienen unas características socioeconómicas y demográficas diversas. Todo ello tiene como resultado que los movimientos sociales sean organizaciones desde el punto de vista humano y cultural muy plurales, y ello se cree que las enriquece. Además; el contar con personas con distintas cualificaciones permite que los movimientos sociales puedan superar numerosos problemas si necesitan contar con técnicos especializados.

Pero también el voluntariado puede suponer una serie de desventajas que hemos de resaltar, la mayor parte de ellas en estrecha relación con las razones que hemos expuesto que son elementos positivos. A pesar de todos los efectos motivacionales que pueden tener los valores y la misión de los movimientos sociales en relación a garantizar una implicación adecuada de los voluntarios en la organización, la práctica evidencia que ésto no es del todo real. Los voluntarios sienten que tienen otras prioridades que atender y que su dedicación a la organización no puede ser demasiado exigente.

Por otro lado, la praxis organizacional indica que a los voluntarios les pueden mover motivaciones y objetivos que no son los de la organización. Entre estas razones -

destacamos el vivir experiencias exóticas y aventureras, conseguir un puesto de trabajo como profesional, aumentar su formación y experiencia, purgar culpas o problemas de conciencia, buscar sin más la autorealización personal o incluso, superar la soledad estableciendo relaciones humanas. Asimismo, la pluralidad que hemos comentado y las diversas formas de implicación de los voluntarios en los movimientos sociales, provocan distintos ritmos de trabajo y falta de coordinación.

Tenemos que mencionar que la permanencia temporal de los voluntarios en los movimientos sociales suele ser menor que en otras organizaciones. Esto se debe a que hasta ahora no haya sido habitual que se firme contrato alguno entre el voluntariado y la organización que obligue a servir dentro de la misma a lo largo de un periodo de tiempo determinado. También es consecuencia de la falta de implicación de los voluntarios, de su desmotivación y falta de formación, de la discontinuidad y descoordinación de las tareas...

Los movimientos sociales de solidaridad realizan una serie de tareas, principalmente en el Tercer Mundo, en situaciones que exigen un esfuerzo personal, muchas veces físico y psicológico al que es difícil entrenarse y habituarse. Los climas del Tercer Mundo, las condiciones de vida de la población, el peligro por la propia vida y por las que están bajo la responsabilidad de los voluntarios, el esfuerzo propio y de la organización que no se traducen en resultados palpables, la lejanía respecto al propio hábitat... infunden desánimo y stress en los voluntarios y cooperantes. Asimismo, los que trabajan en tareas administrativas o incluso, en el caso de las ONGD en cualquier tarea realizada en los países desarrollados, no perciben muchas veces la utilidad de su trabajo. Casi todos estos problemas creemos que son palpables en la mayoría de los movimientos sociales de solidaridad, con lo que la gestión de los mismos tiene que estar orientada a evitarlos del mejor modo posible. En conclusión, estas organizaciones tienen que descubrir los aspectos positivos de los voluntarios y aprovecharlos al máximo para solventar las deficiencias.

El incremento de los movimientos sociales de solidaridad y de personal voluntario, conlleva al interés del Estado por regular la actividad de voluntariado con el fin de conseguir su reconocimiento social y gubernamental, su implantación social, que va más allá de la labor meramente asistencial, y encauzarla hacia la eficacia y no únicamente hacia el mero voluntarismo. Con estos fines surge la Ley de Voluntariado de 1996, en la que se postula por la colaboración de los poderes públicos con los movimientos sociales, y se establecen una serie de derechos y obligaciones entre los voluntarios y la organización a la que pertenecen, muy similares a los existentes entre los trabajadores y las empresas.

Causas políticas y sociales que influyen en el surgimiento de los movimientos sociales a favor de la solidaridad

El surgimiento y la evolución de los movimientos sociales de solidaridad se debe a una serie de causas interrelacionadas que confluyen a lo largo del tiempo. Algunas son propias de todos los movimientos sociales, otras no obstante, únicamente de los movimientos sociales de solidaridad. Entre todas ellas, destacamos las condiciones políticas y legales que permiten e impulsan la existencia de estas organizaciones. Nos referimos primero, a las reglamentaciones sobre la libertad de expresión y asociación. Cuando se democratiza el país y se derogan las normas de la Ley de Asociaciones de 1964 que son

anticonstitucionales por coartar las libertades y el pluralismo asociativo, se abre vía libre a los movimientos sociales. En segundo lugar, tengamos en cuenta las normas que promueven la colaboración entre los gobiernos y las entidades privadas, y las políticas gubernamentales orientadas hacia esta práctica.

Por otro lado, también cabe mencionar las causas de orden social, relacionadas con la concienciación social, la influencia de los medios de comunicación, el nivel de formación, el aumento del tiempo de ocio, la cultura asociativa, el empeoramiento de la imagen de los partidos políticos y entes gubernamentales, o la frustración con los movimientos sociales clásicos.

La concienciación social capaz de crear movimientos sociales a favor de la solidaridad, es fruto de la conjugación de la obligación ética y del conocimiento de los problemas. La ética social, en grandes líneas, tiende en las últimas décadas a asumir el deber de respetar los derechos humanos y defender a los más débiles del sistema socioeconómico. Pensamos que la mayor parte de la sociedad es favorable a que disminuyan las desigualdades económicas entre las personas y las naciones, y a que aumente la integración social de los colectivos marginados. Otro tema diferente es que las personas se movilicen para que se den los cambios necesarios al respecto y sobre todo, que estén dispuestas a ceder parte de sus ingresos o bienestar para que otros mejoren su nivel de vida.

La información sobre las precarias condiciones en las que una parte de la población vive, facilita asumir conciencia ética. Algunos denominan a nuestra cultura la sociedad de la información. La influencia de los mass media y de otras fuentes de información creemos que son vitales para facilitar la concienciación. No obstante, a algunos medios informativos se les reprocha la manipulación y poca objetividad de las noticias y enfoques de los problemas sociales.^[21]

Las instituciones educativas también permiten que la sociedad aumente el conocimiento sobre las desigualdades socioeconómicas y conceda una visión más objetiva y completa al respecto. El nivel formativo de la sociedad aumenta significativamente desde los años sesenta. Cabe destacar que el número de personas graduadas en disciplinas que profundizan en la investigación de las causas y soluciones de las desigualdades y el subdesarrollo también se incrementa. Esto permite, por lo tanto, que la población tenga no sólo acceso a información adecuada sobre los problemas sociales sino que también desarrolle la cualificación necesaria para solventarlos.

Otro de los aspectos que puede influir en el auge de los movimientos sociales es el aumento del tiempo de ocio, es decir, la disminución de las horas dedicadas al trabajo retribuido. Esto permite que la población cuente con más horas para poder colaborar en estas organizaciones. Sin embargo, los movimientos sociales no pueden considerarse como una mera actividad de ocio con el objetivo de mantener ocupadas a las personas en su tiempo libre.

Tengamos también en cuenta la cultura asociativa. Hay sociedades en las que predomina más el individualismo que la dimensión colectiva. Sus causas se estudian desde diversas disciplinas. Por ejemplo, en la sociedad vasca y catalana, el sustrato colectivo tiene mayor relevancia que en las sociedades de su entorno, con lo que facilita el desarrollo de los movimientos sociales. Estas sociedades han sido muy activas en

cuanto a movilización social, principalmente a favor de causas religiosas, de su identidad nacional y de los intereses políticos y obreros. Sin embargo, los movimientos sociales suelen ser vistos como alternativa a los partidos políticos y sindicatos, a los que se cree burocratizados, muchas veces corruptos y casi siempre incapaces de resolver los problemas de los colectivos y poblaciones más desfavorecidos. Los movimientos sociales quieren tomar el relevo a estas organizaciones por la desilusión y desconfianza que emanan. Nos parece significativo el celo con el que los movimientos sociales de solidaridad en los últimos quince años se comprometen a mantener su independencia respecto a no sólo los poderes públicos, sino también a los partidos políticos y sindicatos. No quiere decir que no deseen colaborar con los mismos, sólo que no desean ser instrumentaizados. La tasa de afiliación de la población española a partidos políticos disminuye del 6,6% en 1980, poco tiempo después de la legalización de los mismos, al 3,4% en 1990. En este mismo año, se calcula que la tasa de personas que forman parte de movimientos sociales es del 1,6%.

Durante la década de los noventa se ha ido incrementando el número de voluntarios y de movimientos sociales de solidaridad. Hecho que coincide con la crisis o decadencia de los movimientos sociales clásicos, debida a la frustración por la no consecución de sus objetivos, excesivamente radicales. Por el contrario, los movimientos sociales de solidaridad, suelen ser más pragmáticos y desideologizados, e intentan solucionar problemas más concretos y tangibles.

La influencia de la crisis del Estado de Bienestar en el desarrollo de los movimientos sociales de solidaridad La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)

El Estado de Bienestar consolidado desde los años cincuenta en los países económicamente más avanzados, entra en cuestionamiento financiero e ideológico a partir de la crisis económica mundial de los setenta. En consecuencia, cada vez son más las necesidades sociales y menores los recursos públicos destinados a solventarlas. El Estado de Bienestar es fruto de la concienciación social y la asunción por parte de los partidos políticos y los gobiernos, del compromiso por garantizar a la población una serie de bienes y servicios mínimos, de acuerdo a los valores sociales relacionados con la justicia y la calidad de vida.

El Estado de Bienestar, según Marshall, pone en práctica el concepto de ciudadanía moderna. Cronológicamente hablando, primero existe un reconocimiento de la ciudadanía civil, basada en la libertad individual e interpretada como la libertad de pensamiento y opinión, confesión religiosa, derecho a la propiedad, a acordar contratos válidos y derecho a la justicia. En segundo lugar, surge la ciudadanía política o los derechos a la participación política que tienen su culminación en el sufragio universal. En tercer y último lugar, se desarrolla la ciudadanía social, donde cabe situar el Estado de Bienestar, que supone disfrutar de derechos como el tener cubiertas las necesidades económicas mínimas, a sentirse seguro, compartir la herencia social y vivir con los niveles predominantes de la sociedad.

Pero también el Estado de Bienestar es resultado de una visión particular de la economía que se traduce en una serie de políticas económicas cuyo principal mentor es Keynes. Se ponen en marcha desde la Segunda Guerra Mundial e incluso antes, en los años treinta, con el fin de superar la crisis económica de 1929. Tales políticas parten de que el crecimiento económico se puede conseguir tomando medidas contra las

desigualdades sociales, y tienen las siguientes características. Por un lado, las políticas fiscales son de carácter progresivo e intentan sostener la demanda agregada, el empleo y garantizar una tasa óptima de inversión. Las políticas fiscales igualmente, desean conseguir un volumen adecuado de presupuesto, instrumento básico de la política keynesiana, por medio del cual ejecutar el gasto público. El gasto público y el gasto social no sólo tienen un efecto distributivo sino que además activan la economía. El Estado en definitiva, no sólo redistribuye sino que además, juega un papel como productor y de ello se traduce, por ejemplo, su participación en las empresas públicas.

La crisis de 1973 supone un punto de inflexión. Desde algunos ámbitos políticos y económicos se comienza a percibir que no se puede conjugar el crecimiento económico con el favorecimiento de la equidad. Las políticas económicas hasta entonces impulsadas principalmente desde partidos socialdemócratas para asentar el Estado de Bienestar, son firmemente cuestionadas por el neoliberalismo. No obstante, las personas que más atacan al Estado del Bienestar, reconocen que el gobierno sí tiene que llevar a cabo una mínima protección social. El problema está en determinar cuál es el mínimo que tiene que garantizar el Estado.

Vamos a exponer las características más sobresalientes de la evolución del gasto público en servicios sociales, a los cuales se dedica un importante número de movimientos sociales de solidaridad. Como podemos observar en la Tabla 3, en primer lugar, el gasto de las Administraciones Públicas en transferencias de servicios sociales ocupa un porcentaje escaso del gasto público y por lo tanto del PIB³¹. El porcentaje de estas transferencias en relación al PIB, de 1964 a 1975, presencia una tendencia creciente. Después de un muy ligero descenso, de 1979 a 1983 se lleva a cabo un importante incremento. Desde entonces hasta 1988 comienza a reducirse, y a mediados de los noventa se consigue el mismo nivel que a principios de los ochenta. En el periodo estudiado, observamos que su peso en el gasto público ha ido disminuyendo, o dicho de otra manera, que las transferencias en servicios sociales crecen a un ritmo menor que el gasto público; excepto en la mayor parte de los años del intervalo 1968-75, y en algunos años de la década de los ochenta y noventa en los que se produce algún reापunte.

Tabla 3

Evolución del importe global de las transferencias sociales en servicios sociales de las administraciones públicas (1964-1995)

Año	En porcentaje en relación al PIB	En porcentaje en relación al Gasto Público tota	Año	En porcentaje en relación al PIB	En porcentaje en relación al Gasto Público total
1964	0,21	1,19	1980	0,35	1,05
1965	0,20	1,13	1981	0,36	1,01
1966	0,20	1,10	1982	0,38	1,01
1967	0,19	0,88	1983	0,4	1,03
1968	0,20	0,93	1984	0,38	0,97
1969	0,22	1,03	1985	0,36	0,84

1970	0,26	1,17	1986	0,36	0,84
1971	0,25	1,04	1987	0,34	0,82
1972	0,27	1,15	1988	0,31	0,75
1973	0,26	1,13	1989	0,33	0,77
1974	0,27	1,14	1990	0,32	0,74
1975	0,29	1,15	1991	0,33	0,74
1976	0,27	1,06	1992	0,34	0,74
1977	0,26	0,93	1993	0,36	0,72
1978	0,27	0,92	1994	0,36	0,75
1979	0,28	0,91	1995	0,35	0,75

Fuente: A. Barrada, 1999: 504

Vamos a comparar el gasto público en servicios sociales gestionado por la propia Administración Pública, con el que gestionan las entidades privadas. Como vemos en la Tabla 4, la mayor parte del gasto puede ser considerado como servicios propios de la Administración. Pero más de la tercera parte del gasto total se lleva a cabo mediante conciertos con las instituciones privadas.

Tabla 4

Porcentaje de gasto en servicios sociales gestionado directamente por la administración pública (1980-1995)

1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
69,4	69,0	64,4	58,3	58,8	56,3	55,6	59,4
1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
63,1	58,9	60,8	61,1	61,5	59,6	58,6	57,9

Fuente: Elaboración propia desde A. Barrada, 1999: 734^[4]

Aunque puede depender de la coyuntura económica y de la política gubernamental del momento el aumentar los gastos sociales y en servicios sociales, no parece nada claro que en los países desarrollados se puede dar el nivel de crecimiento en gasto social que se consigue en los países de la OCDE a lo largo de los sesenta y primera mitad de los setenta. Tampoco queda claro que las desigualdades sociales puedan disminuir a pesar del crecimiento económico.

En definitiva, el papel de la sociedad civil parece fundamental para asumir la provisión de recursos humanos, materiales y financieros para llegar a los colectivos con necesidades bien en los países desarrollados, bien en el Tercer Mundo. A continuación exponemos algunos datos para situar la ayuda al Tercer Mundo.

Las políticas gubernamentales que pueden llevarse a cabo con el objetivo de ayudar al desarrollo de los países del Tercer Mundo son de dos tipos. Las primeras, son medidas de carácter global que apuntan a políticas económicas y comerciales que pueden favorecer los intereses del Tercer Mundo. Las segundas, se canalizan vía Ayuda Oficial al Desarrollo con el objetivo de financiar la cooperación pública o la de las ONGD.

Sin embargo, la ayuda de los países desarrollados es inferior en términos económicos a la reclamada por la ONU en 1970 que desea que alcance el 0.7% del Producto Nacional Bruto (PNB), como podemos constatar en la Tabla 5. Desde entonces hasta ahora, en ninguno de los años, la media ha alcanzado la mitad de lo acordado, siendo el promedio de todos los años algo superior al 0.3%. Incluso, a partir de 1994 presenciamos un descenso significativo de la aportación al Tercer Mundo.

Para finalizar, el descontento que puede existir ante la intervención social del Estado se debe también a que lleva a cabo una ineficiente gestión, es decir, no optimiza adecuadamente sus recursos ni cumple con sus objetivos. Tal crítica se suele hacer desde la perspectiva de la cultura burocrática que rige la dirección y organización de la Administración Pública. Para solucionar este problema es necesario mejorar la gestión de la Administración tendiendo hacia modelos de gestión y cultura más corporativos y competitivos. Este cambio organizacional en las instituciones públicas se le denomina reinención, y se impulsa por primera vez desde el gobierno de Estados Unidos (GORE, A.; 1994: i):

«No podemos seguir permitiéndonos el lujo de pagar más y obtener menos de nuestra Administración Pública. La respuesta ante cualquier problema no puede ser siempre otro programa o más dinero. Es hora de cambiar radicalmente el modo de operar de la Administración - pasar de una burocracia jerarquizada a una administración empresarial que permita a ciudadanos y comunidades cambiar nuestro país de abajo a arriba. Debemos premiar a las personas e ideas que funcionan y librarnos de las que no funcionan».

También se puede limitar la intervención del Estado colaborando o traspasando sus competencias a las organizaciones no lucrativas privadas con una cultura y una preparación mejor. En el caso de que se dé esta última circunstancia el papel del Estado puede seguir vigente si sirve como fuente de financiación.

Tabla 5

Porcentaje de la ayuda oficial al desarrollo de los países de la OCDE en relación al Producto Nacional Bruto (PNB) (1970-1997)

País	1970	1975	1978	1983	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
	-71* ₁	-76* ₁	-82* ₁	-87* ₁	2	3	3	3	3	3	3	4	5	5
Australia	0,59	0,53	0,50	0,44	0,46	0,38	0,34	0,38	0,37	0,35	0,35	0,36	0,28	0,28
Austria	0,07	0,17	0,28	0,24	0,24	0,23	0,25	0,34	0,30	0,30	0,33	0,33	0,24	0,26
Bélgica	0,48	0,55	0,56	0,52	0,39	0,46	0,46	0,41	0,39	0,39	0,32	0,38	0,34	0,31

Canadá	0,41	0,49	0,45	0,48	0,50	0,44	0,44	0,45	0,46	0,45	0,43	0,38	0,32	0,34
Dinamarca	0,40	0,53	0,73	0,84	0,89	0,93	0,94	0,96	1,02	1,03	1,03	0,96	1,04	0,97
Finlandia	0,09	0,17	0,24	0,42	0,60	0,64	0,65	0,80	0,64	0,45	0,31	0,32	0,34	0,33
Francia	0,68	0,61	0,50	0,59	0,58	0,61	0,60	0,62	0,63	0,63	0,64	0,55	0,48	0,45
Alemania	0,33	0,38	0,44	0,44	0,39	0,41	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,31	0,33	0,28
Irlanda		0,10	0,20	0,23	0,20	0,17	0,16	0,19	0,16	0,20	0,25	0,29	0,31	0,31
Italia	0,16	0,11	0,15	0,31	0,39	0,42	0,31	0,3	0,34	0,31	0,27	0,15	0,20	0,11
Japón	0,22	0,21	0,28	0,31	0,32	0,31	0,31	0,32	0,30	0,27	0,29	0,28	0,20	0,22
Luxemburgo					0,20	0,19	0,21	0,33	0,26	0,35	0,4	0,36	0,44	0,55
Países Bajos	0,60	0,77	0,97	0,97	0,98	0,94	0,92	0,88	0,86	0,82	0,76	0,81	0,81	0,81
Nueva Zelanda	0,23	0,47	0,31	0,27	0,27	0,22	0,23	0,25	0,26	0,25	0,24	0,23	0,21	0,26
Noruega	0,33	0,68	0,92	1,08	1,13	1,05	1,17	1,13	1,16	1,01	1,05	0,87	0,85	0,86
Portugal			0,02	0,07	0,21	0,25	0,25	0,31	0,36	0,29	0,35	0,25	0,21	0,25
España			0,11	0,08	0,07	0,14	0,2	0,24	0,27	0,28	0,28	0,24	0,22	0,23
Suecia	0,40	0,78	0,88	0,85	0,86	0,96	0,91	0,90	1,03	0,99	0,96	0,77	0,84	0,79
Suiza	0,12	0,19	0,23	0,31	0,32	0,30	0,32	0,36	0,45	0,33	0,36	0,34	0,34	0,34
Reino Unido	0,42	0,39	0,42	0,32	0,32	0,31	0,27	0,32	0,31	0,31	0,31	0,29	0,27	0,26
Estados Unidos	0,30	0,26	0,24	0,23	0,21	0,15	0,21	0,20	0,20	0,16	0,15	0,10	0,12	0,09
Total OCDE	0,34	0,34	0,32	0,33	0,34	0,32	0,33	0,33	0,34	0,31	0,30	0,27	0,25	0,2

Fuente: 'J. Martínez Peinado y J. M. Vidal Villa, coord., 1995: 398 ^CDE, Development Co-operation 1994 ³OCDE, Development Co-operation 1995 "OCDE, Development Co-operation 1997 ⁵OCDE, Development Co-operation 1998, * Promedios.

La necesidad de gestionar eficaz y eficientemente los movimientos sociales de solidaridad

Los movimientos sociales de solidaridad consideran que tienen que exigir a sus miembros más que mera buena voluntad. En buena parte, el surgimiento de los movimientos sociales de solidaridad se debe a las deficiencias que la Administración Pública y las empresas arrastran para dirigirse de forma eficaz a los colectivos más necesitados de la sociedad y del mercado. Los movimientos sociales de solidaridad han de asegurarse que los destinatarios últimos de sus productos sean las personas que

realmente los necesitan, no quienes los pueden pagar como en el caso de las empresas o quienes tienen derecho por ser ciudadanos de una determinada comunidad política, como en el caso de las instituciones públicas.

Se tiende a creer que la cultura de gestión de los movimientos sociales de solidaridad tiene que orientarse hacia la de las empresas competitivas. Lo cual no significa que los movimientos sociales de solidaridad tengan que realizar una mera gestión empresarial de sus organizaciones. Puesto que el fin principal de las empresas es conseguir beneficios económicos y su gestión y estrategia están orientadas a quienes pueden pagar los bienes y servicios que producen. El desafío de los movimientos sociales de solidaridad estriba en aplicar las técnicas y los elementos culturales de las empresas para conseguir mejores resultados sociales y económicos, pero sin adulterar sus fines y valores últimos. Este paso es posiblemente el punto culminante de diferenciación, y quizás de ruptura, frente a los movimientos sociales clásicos.

Los voluntarios son todavía reacios a aplicar ideas de gestión de las empresas a sus organizaciones, porque creen que sus fines no sólo son distintos, sino que incluso pueden ser incompatibles a los de las empresas, y como consecuencia también sus modelos de gestión. Con lo que los equipos directivos de los movimientos sociales, que son sobre los que recae la máxima responsabilidad de liderar el cambio organizacional, han de esforzarse por convencerles de tal necesidad. Para ello puede ser eficaz una medida tan sencilla como modificar la semántica. Por ejemplo, es mejor denominarles beneficiarios y no clientes, a quienes van destinados los bienes y servicios de los movimientos sociales de solidaridad.

A continuación, vamos a establecer las pautas de gestión más sobresalientes para su aplicación en estas organizaciones. Creemos que en primer lugar, lo que hay que definir es el público objetivo. Es decir, las personas que por cuenta propia o en el nombre de alguna institución pública o privada, influyen de manera significativa en el devenir de cada movimiento social. Suelen formar parte del público objetivo los beneficiarios, las instituciones públicas, otros movimientos sociales, las empresas, los donantes, la opinión pública y sus instituciones. Los voluntarios y profesionales, también pueden ser considerados como público objetivo, porque aunque no son agentes del entorno, son sujetos claves para la misión de los movimientos sociales de solidaridad.

Posteriormente, es necesario concretar lo que la organización puede reclamar al público objetivo y cuál es su relación con él. Generalmente, se suele hablar de atraer, fidelizar, colaborar, comunicarse y coordinarse con el público objetivo. Para ello es necesario aplicar técnicas de marketing tal que la investigación comercial, las técnicas de publicidad, la segmentación, la diferenciación... El ámbito de marketing es el que más se ha desarrollado en estas organizaciones.

Los movimientos sociales de solidaridad también tienen que pensar en la dirección y organización de sus miembros y de las tareas que realizan. Es decir, han de definir la estructura organizativa que creemos, tiene que ser flexible. La falta de flexibilidad burocratiza y estanca las organizaciones, y es una de las críticas que suele hacerse a la Administración Pública. Contrariamente, los movimientos sociales son por naturaleza dinámicos, activistas, creadores constantes de iniciativas y nuevas ideas.

Tienen que preocuparse de definir políticas de formación, promoción, selección de personal, remuneración... Asimismo, han de especificar su estrategia de financiación y desarrollar indicadores de los activos tangibles e intangibles de la organización. Significa, entre otras cosas, aplicar los sistemas de contabilidad de las empresas a las necesidades de los movimientos sociales de solidaridad. Por otra parte, algunas organizaciones como las ONGD, tienen que prestar especial atención a la gestión logística, con el fin principalmente, de conseguir la disponibilidad de recursos en el tiempo y el espacio adecuado. En definitiva, estas organizaciones han de estudiar, planificar, ejecutar, evaluar y llevar a cabo un seguimiento riguroso de cada una de sus actividades. Por ejemplo, el ciclo de vida de los proyectos de cooperación está bastante desarrollado.

La puesta en marcha de estas tareas se suele denominar profesionalización e institucionalización. También las personas que reciben dinero por realizar actividades en los movimientos sociales se suelen llamar profesionales. Pero también la profesionalización pretende que los movimientos sociales de solidaridad cuenten con personal cualificado para que desarrolle funciones concretas de forma competente, a caballo de una formación especializada. La profesionalización, a la vez, desea que los miembros de la organización actúen con profesionalidad. Es decir, que asuman su responsabilidad con la organización y con los beneficiarios de las mismas. En otras palabras, desarrollen en sus tareas una ética deontológica.

En el caso de la remuneración, se suele realizar para compensar al personal por su dedicación en la organización, que le impide la realización de otras actividades, como puede ser tener un puesto de trabajo remunerado. A veces, no es tanto el número de horas como la distribución de las mismas. Por ejemplo, dedicar a la organización horas los fines de semana, permite trabajar los días laborables, pero hacerlo en estos días, tal vez no. Mediante la retribución al personal se suele realizar a la vez, un ejercicio de justicia social y de motivación.

La mayor parte de los movimientos sociales suelen contar con voluntarios y personal remunerado. A este respecto, destacamos los problemas con los que es fácil topar. Primero, los estereotipos que funcionan dentro de la organización con relación a los voluntarios y profesionales. Se piensa que los voluntarios son dóciles, poco preparados, desorganizados, manipulables, mientras que cuentan con otros elementos positivos, como la capacidad de empatía, la proximidad o la capacidad de adaptar métodos innovadores. De los profesionales se valoran sus métodos y formación, que permiten orientar a la organización hacia la eficacia, mientras que se les suele achacar que son ajenos a la realidad.

Además de estas imágenes deformadas, y en segundo lugar, puede haber conflictos cuando unos exigen a otros cosas que no les corresponden. Por ejemplo, los profesionales pueden reclamar a los voluntarios más dedicación. Pero si el rol no lo exige queda fuera de lugar tal reclamación. Por otra parte, los voluntarios han de tener los mismos derechos que los profesionales en formarse. En conclusión, pensamos que la organización tiene que exigir a los voluntarios y profesionales lo que exigen sus tareas y responsabilidades. Con lo que conviene estructurar y definir los deberes y derechos de las personas y sus funciones, siempre y cuando no se caiga en la burocratización de la organización.

Resumiendo, es necesario que los movimientos sociales de solidaridad sepan aplicar una gestión a medida de sus valores, necesidades y objetivos. Esto puede significar desembolsar dinero y tiempo, pero es muy posible que los resultados los amorticen. De todas las maneras estas organizaciones, en el día a día, tienen que encontrar un punto de equilibrio entre el dinero que invierten en gastos de gestión y el dinero que va directamente dirigido a los beneficiarios.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

Banco Mundial, Informe sobre desarrollo mundial, Mundi-Prensa, 1999.

Barrada, A., El Gasto Público de Bienestar Social en España de 1964 a 1999, Fundación BBV, Bilbao, 1999.

Blaco Puga, M. R., «Trabajadores voluntarios-trabajadores remunerados: Reflexiones sobre unas relaciones que tienen que ser posibles», Documentación Social, nº 104, Julio-Septiembre, 1996. Págs. 129-41.

Casey, J., «El papel de las organizaciones no gubernamentales en la elaboración de las políticas públicas. El caso de la integración de inmigrantes extranjeros en Cataluña», Dossiers Barcelona Associacions, nº 20. Págs. 1-59.

Crompton, R., Clase y estratificación: Una introducción a los debates actuales, Tecnos, Madrid, 1993.

Estébanez Estébanez, P. & Alonso Ibáñez, B., «El Voluntariado, un reto para la organización de la acción voluntaria», Boletín de Estudios Económicos, nº 158, Vol. LL, Agosto, 1996. Págs. 299-309.

Gizaker, Estudio opinático actitudinal de la sociedad vasca, ante la cooperación al desarrollo, 1995.

Gore, A., Crear una administración pública que funcione mejor y cueste menos. Informe del National Performance Review, IVAP, Vitoria-Gasteiz, 1994.

Izquierdo, A., «Inmigrantes y minorías étnicas», Tendencias Sociales en España (1960-1990), Vol. III, Fundación BBV, Bilbao, 1993. Págs. 383-97.

Juárez, M. & Renes Ayala, V, dir., «Población, estructura y desigualdad social», VI Informe Sociológico sobre la situación social de España, Tomo I, Fundación Foessa, Madrid, 1994. Págs. 273-83.

Martínez Peinado, J. & Vidal Villa, J. M., coord., Economía mundial, McGraw-Hill,

Madrid, 1995. OCDE, Development Co-operation 1994. OCDE, Development Co-operation 1995, OCDE, Development Co - operation 1997. OCDE, Development Co ~ operation 1998.

Osaba, J. A. y otros, Primeras jornadas municipales sobre la cooperación Norte-Sur. La dimensión local de la solidaridad, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 1996.

Prieto-Lacaci, R., «Asociaciones Voluntarias», Tendencias sociales en España (1960-1990) Vol. I, Fundación BBV, Bilbao, 1993. Págs. 197-217.

Tocqueville, A., La democracia en América, Orbis, Barcelona, 1985.

Vernis, A. y otros, La gestión de las Organizaciones No Lucrativas, Ediciones Deusto, Bilbao, 1998.

LECTURAS RECOMENDADAS

ACNUR, The CIS Conference on Refugees and Migrants, Geneva, ACNUR, 1996.

Castel, Antoni y otros, El África que viene, Barcelona, Intermón, 1999.

CIDOB;, Anuario Internacional CIDOB 1998: Claves para interpretar la política exterior española y las relaciones internacionales en 1998, Barcelona, CIDOB, 1999.

Commins, Stephen y otros, Desarrollo en estados de guerra, Barcelona, Icaria-CIP, 1996.

Conference on migration and international co-operation, Migration and Development: New Partnerships for Co-operation, París, OCDE, 1994.

De Villota, Paloma, Itziar Hernández y otros, Globalización y género, Madrid, Síntesis, 1999.

ECHO, Olvidados: ECHO Informe Anual, Bruselas, ECHO, 1998.

Grasa, Rafael y otros, Cambio social y desarrollo: solidaridad Norte-Sur, Alicante, Centro Loyola de Alicante, Universidad de Alicante, 1999.

Kumar, Krishna, Rebuilding Societies after Civil War: Critical Roles for International Assistance, London, Lynne Rienner, 1997.

Malgesini, Graciela, Cruzando fronteras: migraciones en el sistema mundial, Barcelona, Icaria-Fuhem, 1998.

Manzanos Bilbao, César, El grito del otro: arqueología de la marginación racial: la discriminación social de las personas inmigrantes extracomunitarias desde sus vivencias y percepciones, Madrid, Tecnos, 1999.

Martin Beristain, Carlos, Reconstruir el tejido social: un enfoque crítico de la ayuda humanitaria, Barcelona, Icaria-Betiko Fundazioa (Ibarra Oriol), 1999.

OCDE, Trends in International Migration: Annual Report 1999: Continuous Reporting System on Migration, París, OCDE, 1999.

ONU, 1999 Global Population: the Facts ofLife, New York, ONU, 1999.

Pérez De Armiño, Karlos, Guía de rehabilitación posbélica: el proceso de Mozambique y la contribución de las ONG, Bilbao, Hegoa, 1997.

Perrin, Pierre, Handbook on War and Public Health, Geneva, International Committee of the Red Cross, 1996.

Raich, Jordi; Vila San Juan, Rafael, El laberinto humanitario, Madrid, Médicos Sin Fronteras, 1999.

SECIPI, Conflicto, paz y cooperación para el desarrollo en el umbral del siglo XXI,

Madrid, SECÍPI, 1909. Wijaers, Marjan, Trafficking in Women Forced Labour and Slavery-Like Practices in

Marriage, Domesfic Labour and Prostitution, LAP-CHEW, Lin-Utrech, Foundation

Against Trafficking in Women, 1997.

[1]De hecho, según un estudio realizado por GIZAKER en el País Vasco en 1995, el 82.5% de la población no sólo desconoce el significado de las siglas ONGs sino que además no conoce su tarea. Sin embargo, aunque las ONGs no sean conocidas socialmente sí lo son las causas que representan.

[2]Esto es especialmente acuciante en los temas del Tercer Mundo, donde suele prevalecer lo anecdótico, lo negativo, lo conflictivo, lo caótico, lo catastrofista, lo violento y a veces, lo paradisíaco. Los países desarrollados se acercan al Tercer Mundo desde una perspectiva paternalista y una red unidireccional centralizada desde los países ricos, impide percibir de manera más objetiva la situación de los países pobres. Los países pobres conocen los problemas del resto de países en sus mismas condiciones por medio de las agencias de prensa de las naciones ricas. Cuando se dan a conocer sus problemas no se detienen a explicar las causas y muchas veces priman los intereses de las élites políticas de los países pobres por encima de los pueblos y sus minorías, con los cuales sostienen conflictos. Asimismo, los logros y los esfuerzos de los países pobres por desarrollarse no se dan a conocer. En consecuencia, las ONGDs en 1989 crean un código de conducta de imágenes y mensajes con el fin de evitar tales deficiencias.

[3]Éstos son gastos corrientes, para conocer un dato más completo del gasto total en servicios sociales hay que incluir los gastos en inversiones.

[4] La fuente utilizada es la Seepros, homologada por la Unión Europea.